

Sevilla, 12 y 13 de noviembre de 2009

COMUNICACIÓN

# Dinámicas de exclusión social en el marco de Políticas de Inclusión Étnica: comunidad gitana, operaciones de realojamiento y relaciones étnicas en España

Manuel Ángel Río Ruiz  
Universidad de Sevilla



Centro de Estudios Andaluces  
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

**DINÁMICAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN ÉTNICA: COMUNIDAD GITANA, OPERACIONES DE REALOJAMIENTO Y RELACIONES ÉTNICAS EN ESPAÑA**

Manuel Ángel Río Ruiz

Universidad de Sevilla (Departamento de Sociología)



## Introducción

A lo largo del posfranquismo, las gitanas y gitanos de España se han acercado como nunca antes a los patrones de vida culturalmente dominantes. A su vez, a nivel intraétnico, esta comunidad ha experimentado una diversificación sin precedentes en condiciones de vida, maneras de vivir la identidad étnica, y formas de relación con las poblaciones mayoritarias y con las agencias del Estado, cuya acción redistributiva resultará decisiva en la transformación de las condiciones de vida de amplias franjas de la población gitana durante las últimas tres décadas. Años en los que los miembros de este pueblo abandonan paulatinamente la clasificación y lugar que les reservó de facto el Estado franquista, el de “categoría predelictiva” relegada al “furgón de cola” de las políticas sociales, para convertirse en objeto frecuente de políticas de inclusión.

Pero no todo son luces. La intervención de las agencias del Estado sobre comunidades gitanas también reúne sombras, como la asimétrica distribución de las cuotas de solidaridad interétnica impuestas por las administraciones entre los distintos espacios residenciales y escolares que ocupan las distintas clases sociales. O como la expansión de las condiciones sociales de posibilidad para la movilización étnica al incrementarse la interdependencia, la competencia, así como los conflictos en estos escenarios donde se experimentan procesos desegregativos, como ya sucediera en otros sistemas de relaciones interétnicas sustentados en una larga y multidimensional segregación. Lugares que también asistieron a la convulsa desintegración de esos modelos de cierre social a partir de marcas étnicas o raciales, una vez el Estado retiró el apoyo a prácticas y leyes excluyentes (Parkin, 1984: III; Olzak, 1992; Olzak et al, 1994; Olzak y Sanahan, 2002). En el caso de los gitanos y gitanas de España, todo esto ocurre tras siglos de racialización estatal y de minoración de esta comunidad que terminaron por consolidar y naturalizar jerarquías interétnicas, así como lógicas y situaciones segregativas, al cabo interiorizadas como legítimas por los grupos actores de las relaciones interétnicas. Pero cuyo desmoronamiento producto de nuevas políticas y parámetros de redistribución interétnica de los recursos y de las oportunidades sociales concitará frecuentes agravios y multitudinarias resistencias civiles. Las siguientes afirmaciones de Parkin –sociólogo neweberiano que analiza el peso de los procesos históricos de racialización estatal en los conflictos étnicos– resultan extensibles a la historia de las relaciones con la población gitana, a la lejana y a la más reciente:

“La exclusión colectiva, una vez el Estado retira su apoyo a prácticas excluyentes, viene normalmente facilitada por determinadas políticas de Estado vigentes en el pasado. Por ejemplo, las minorías que en épocas anteriores estuvieron privadas de derechos civiles y políticos son el objetivo natural de las acciones de cierre social excluyente por parte de la población dominante [...] Aunque con el paso del tiempo, esa situación de desventaja en el terreno legal y político pueda formalmente desaparecer, esas desventajas heredadas acumuladas continúan marcándolos como víctimas en la lucha por la distribución [...] Así, la exclusión emprendida contra determinados grupos sociales es un reflejo de una política similar emprendida y mantenida anteriormente a través del Estado [...] A través de la acción del Estado es de la única manera que los grupos culturales se ordenan jerárquicamente y adquieren la conciencia y capacidad de ejercer unos contra otros acciones de cierre social (Parkin, 1984: 137-138)<sup>1</sup>.

Así, a pesar de lo mucho que ha cambiado la población gitana, para muy amplios sectores de las poblaciones mayoritarias los miembros de esta etnia continúan representando una comunidad estigmatizada al tiempo que estigmática<sup>2</sup>. A ello contribuyen fenómenos de sobrerrepresentación y asimetría etnicista de largo alcance histórico si de gitanos hablamos: se juzga al conjunto del colectivo a partir de los comportamientos execrables e imágenes desviantes que proyectan las fracciones menos nómicas de la minoría, identificándose en cambio la mayoría excluyente a partir de su sector más ejemplar o nómico. Esta sociodinámica de la estigmatización, que frente a lo

---

<sup>1</sup> El neoweberiano citado se sitúa en una larga y fecunda tradición de estudios que subrayan el papel del Estado como red de agencias estructurante de las categorizaciones, relaciones, límites y antagonismos étnicos. Los Estados, aún en casos de conflictos étnicos que nos sorprenden porque no encontramos rastros de antagonismos inmemoriales entre culturas, son los principales actores en crear, acentuar y disminuir las identidades y rivalidades étnicas. Dado su papel central en la provisión de recursos, el Estado es, tanto el principal foco de demandas de los grupos étnicos, como el principal foco de expresión de los agravios interétnicos. Fenómenos ambos que se ponen de manifiesto cuando la ampliación de los límites étnicos de las políticas públicas promueven la movilización étnica (Williams, 1994: 59; Björklund, 1986: 296).

<sup>2</sup> Lo vienen indicando, aún con las consabidas limitaciones del instrumento, diversas encuestas dedicadas a medir la incidencia y distribución del prejuicio étnico: al menos en escenarios de no muy alta inmigración, la gitana conforma la comunidad que más inveterados, extendidos, marcados y diversificados prejuicios cosecha, en todos los grupos de edad y en todas las clases sociales (Río Ruiz, 2006).

que tiende a suponerse nos es un fenómeno privativo de las relaciones y lógicas de exclusión entre grupos étnicos (Elías y Scotson, 1965/1997: 223; Elías 1965/2003), se ve si cabe reforzada por las todavía desproporcionadas –al menos en relación al peso demográfico relativo de la comunidad gitana en la población española– cifras de miembros de esta etnia en la llamada “cultura de la pobreza”. Esta situación que afecta aún a varios miles de familias, sobre todo en periferias de urbes donde los lazos de solidaridad primaria entre congéneres étnicos se han desmoronado mucho más, fomenta lo que en la literatura sobre prejuicio se conoce como “errores de atribución intrínseca”, esto es, la tendencia a atribuir a particularidades culturales o idiosincrasias grupales previamente sustancializadas la existencia de comportamientos y rasgos negativos que, sin embargo, son un subproducto de situaciones y condiciones estrictamente sociales, como las generadas por la pobreza y la exclusión sistemática (Solana Ruiz, 2001: 201).

En esta comunicación se analizan algunos de los efectos conflictivos y lógicas de exclusión contra familias gitanas en el espacio residencial, así como algunas de las luces y sombras de las políticas de realojo de la población gitana, llevadas a cabo una vez el Estado retira su apoyo a prácticas excluyentes accediendo buena parte de la población gitana a fórmulas de recambio residencial de las que en épocas anteriores quedó excluida esta comunidad.

En primer lugar, se identifican las distintas fases que definen la intervención estatal aplicada sobre la “cuestión residencial gitana”. Se presenta, sucintamente, las distintas fórmulas de realojo aplicadas sobre comunidades gitanas durante las últimas tres décadas, en el curso de las cuales se multiplican las intervenciones sobre comunidades gitanas en situaciones de exclusión. A su vez, se identifican los distintos factores y experiencias que intervienen en la evolución desde realojos que preservaban la marca étnica (dominantes en los ochenta) hacia fórmulas que priorizan la coresidencialidad interétnica, las cuales se extienden a partir de la segunda mitad de los noventa.

En segundo lugar, se revelan algunas sombras de las operaciones de realojo, constantes a lo largo del periodo estudiado. Fundamentalmente dos: i) las interrelaciones entre planes de realojo y de ordenación capitalista del territorio, y ii) la estructuración clasista de unas políticas de inclusión de grupos estigmáticos muy desigualmente distribuidos por los distintos espacios urbanos que ocupan las clases sociales.

En tercer lugar, se atiende a los distintos efectos sobre las relaciones étnicas de los diferentes modelos de recambio residencial, los cuales multiplican de distinta manera interdependencias competitivas, dinámicas de exclusión, agravios interétnicos y movilizaciones etnicistas, además de las consabidas oportunidades de convivencia intercultural al hilo de situaciones de coresidencia interétnica, en muchas facetas novedosas en la historia en común con la población gitana.

La comunicación, resumen de una parte de una tesis doctoral (Río Ruiz, 2005) sobre movilización antigitana en la España posfranquista, se sustenta la explotación de diversas fuentes (prensa, literatura gris, censos, y otros datos secundarios) donde se recoge información sobre proyectos y experiencias de realojamiento de familias gitanas a lo largo de la geografía española. Se defiende que una mayor atención a los condicionantes y efectos sociales de una larga experiencia de realojos, como la que ha afectado a volúmenes considerables de población gitana, podría contribuir a revelar un conjunto de buenas y malas prácticas a tomar en consideración a la hora de la gestión estatal futura de diversas poblaciones estigmatizadas, y en situación de exclusión residencial.

### **Minoría gitana y políticas de inclusión étnica**

Desde finales de los setenta las condiciones residenciales y escolares de la mayor parte de la población gitana han experimentado, en relación al tardofranquismo, cambios sustanciales, como revela la comparación histórica entre algunos datos dispersos por estudios de alcance estatal y local.

#### ***Cambios en las condiciones residenciales de la población gitana***

Datos sobre finales de los setenta dan cuenta de la extendida exclusión residencial de la población gitana, la mayoría concentrada entonces en poblados chabolistas, la manifestación más marcada de pobreza y exclusión espacial según Martínez Veiga (1999). Así, en el marco de una comisión interministerial para abordar los problemas del pueblo gitano<sup>3</sup>, el Instituto de Bienestar Social de la época, en colaboración con la Dirección General de Desarrollo Comunitario, realizó una investigación. En la misma se abordaba, junto a otros aspectos, la situación residencial y

---

<sup>3</sup> Comisión regulada por el Real Decreto 250/179, del 11 de enero de 1978.

necesidades de vivienda de la comunidad gitana estatal. Aunque el baile de cifras es notable, el trabajo referido concluía que había entonces en España “entre 300.000 y 500.000 gitanos, de los que se calcula que un 75% vive en chabolas”. Según ese mismo estudio, en 1979, el 52% de los chabolistas que aún quedaban, en un país con 38 millones de habitantes entonces, pertenecía a ese menos de medio millón de españoles en aquellas fechas identificados como etnia gitana<sup>4</sup>. En el caso de Madrid, los datos publicados casan con los recopilados a nivel nacional. Así, en 1976, el 80% de la población gitana de la capital residía en chabolas. El 70% de los ocupantes habían ya nacido en ellas. Por ejemplo, en el distrito de Mediodía, con una población gitana de 5.000 personas en el año 1980, había 4.200 chabolistas de esta etnia, según datos de un censo de la Asociación Desarrollo Gitano<sup>5</sup>.

La asociación entre comunidad gitana y chabolismo, tan errónea como injusta y perversa en nuestros días, sí que se ajustaba hace no mucho a una realidad verdaderamente extendida y definitoria de las condiciones residenciales de la mayor parte de la comunidad gitana. Salvo excepciones, una población masivamente emigrada a las ciudades quedó al margen del “paternalismo urbano”, esto es, de las grandes operaciones de vivienda social del franquismo que sí incluyeron, en cambio, a cientos de miles de familias chabolistas y barraquistas payas de las grandes urbes del Estado franquista (Gaviria et. al., 1991: 265-279). El chabolismo, que en muchos escenarios urbanos de posguerra comenzó siendo un fenómeno interétnico, terminó convirtiéndose en un fenómeno de marcas étnicas a partir de los sesenta. Todo ello como producto de asimetrías interétnicas a la hora de distribuir viviendas públicas bien clarificadas por la antropóloga española que más, y durante más tiempo, ha investigado entre vecindarios gitanos:

“La expansión de la ciudad tiene consecuencias muy importantes y graves para los gitanos [...] Conforme se iban edificando viviendas sociales, los payos chabolistas iban siendo trasladados a pisos, cosa que muy rara vez conseguían los gitanos [...] Los requisitos de estar en posesión de documentación personal completa, contrato de trabajo, regularización laboral plena, junto al racismo institucional y de los vecindarios, hicieron que sólo una minoría de gitanos, y sólo en unos

<sup>4</sup> Cit. *El País*, Soc., 19/1/1979, pág. 19.

<sup>5</sup> Cit. *El País*, ed. Md. 22/6/1976, pág. 16 y *El País*, ed. Md. 29/3/1981, pág. 17

pocos lugares, accedieran a una vivienda social<sup>6</sup>. En los poblados chabolistas a principios de los setenta no quedaban más que gitanos abandonados a su suerte. A ellos se les unían muchos otros gitanos que goteaban de nuevos desalojos. Algunos continúan todavía en poblados chabolistas, aunque su número y su capacidad han disminuido notablemente en nuestros días [...] La responsabilidad de aquel proceso de concentración fue, principalmente, de la administración. Y suya también fue la responsabilidad de lo que ocurrió pocos años después con unas relaciones vecinales marcadas por la extensión de reacciones racistas” (San Román, 1997: 218).

Algunos casos, como el del enorme poblado (al final sólo) gitano de La Perona en Barcelona estudiado también por Sabater (1986: 120-123), ilustran cómo, representando todos los chabolistas un obstáculo para la expansión de la ciudad, las soluciones administrativas aplicadas variarán en función de las marcas étnicas de los mismos. Mientras que las payas acceden a pisos públicos, las familias gitanas son desalojadas a golpe de metralleta de los diseminados segregados que ocupaban, terminando resegregadas en grandes extensiones chabolistas. Algunas familias gitanas chabolistas, cabría decir que las más afortunadas, terminan por acceder a “unidades vecinales de absorción”. Eso sí, lo hacen una vez los payos que las ocuparon temporalmente acceden a los pisos públicos<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> No se mantenían, como sabemos, normas o disposiciones legales que limitaran la distribución de viviendas sociales entre familias gitanas. Se puede afirmar sin embargo que, también a la hora de estos repartos, prevalecían muchos de los elementos definitorios del “racismo institucional”, esto es, un conjunto de prácticas discriminatorias conformadoras de segregaciones, arraigadas en el funcionamiento cotidiano de la instituciones, pero que se reproducen sin que necesariamente las agencias y agentes públicos mantengan la intencionalidad o conciencia de discriminar (Solana Ruiz, 2001: 216). En el caso de la exclusión gitana de los planes de vivienda franquista bastaba, en ausencia de disposiciones o normas que oficializaran la desigualdad de trato, su escasez de redes sociales en el entramado paternalista del régimen, su exclusión de la norma salarial, y la gama de criterios reservados a “mayorías normalizadas” que manejaban los responsables de las distribuciones de viviendas públicas, quienes, por otra parte, podían permitirse abiertas arbitrariedades y licencias etnicistas sin apenas riesgos o costes de ser denunciados por desigualdad de trato.

<sup>7</sup> Otro ejemplo: “Cuando [en 1964] se canalizó el Manzanares, se expulsó a las 250 familias que habitaban en lo que debiera ser el cauce. Los payos fueron alojados en viviendas prefabricadas mientras se construían viviendas sociales, y los gitanos fueron depositados en el vertedero de los Toriles, así como en el Pozo del Tío Raimundo, en unos terrenos cedidos por la Gerencia de Urbanismo [...] En Pan Bendito, construido en 1963, el 70% de la población es gitana y tiende a aumentar el porcentaje. En 1972 comenzaron a llegar familias gitanas que ocuparon las viviendas [prefabricadas] de los vecinos payos que accedieron a pisos del Ministerio” [El País, ed. Mad., 22/6/76, pág. 20].



La situación de exclusión ante la vivienda no cambió por decreto. En Madrid, por ejemplo, apenas 900 familias gitanas se beneficiaron de la conocida como mayor operación de vivienda social de la historia reciente europea, con más de 40.000 viviendas construidas en apenas tres años. A mitad de los ochenta, erradicado el complejo chabolismo payo de la capital en tal proceso de realojamiento masivo, subsistían en Madrid 61 núcleos chabolistas exclusivamente gitanos entre los que se repartían unas 2.700 chabolas. Conformaban los gráficamente llamados “poblados-margen” (Rodríguez Villasante et al, 1991; Montes Mieza, 1986: 156 y 158, Gaviria et al 1991: 68, Martín Tejedor, 1999: 28)<sup>8</sup>.

Es a partir de la segunda mitad de los ochenta cuando se multiplican las grandes operaciones de realojo de población gitana, aunque bajo fórmulas diversas que van, como veremos, desde el realojo exclusivamente entre congéneres étnicos, hasta la dispersión de cupos limitados de familias gitanas entre hogares y bloques payos. Comenzados los noventa, algunos estudios sobre las condiciones residenciales de la población gitana ya indicaban el comienzo de una gran transformación, en gran medida acelerada en la segunda mitad de los noventa con el desmantelamiento de muchas de las barriadas de “tipología especial”. Un trabajo de 1991, el primer mapa de vivienda gitana en España, abarcó el análisis de los hábitats gitanos en más de 900 municipios con presencia de más 50 familias gitanas. En esas fechas:

“Un 47% de las familias gitanas ha accedido en fechas recientes a “barriadas de promoción pública” [...]. Un 23% de las familias habitan en “barrios de primera y segunda expansión” [...] Se caracterizan estos barrios por ser los más normalizados, donde las poblaciones están más

---

<sup>8</sup> En 1986, justo cuando se va a crear un consorcio específicamente destinado a gestionar el realojo de población marginal (gitana), se reconocía desde la recién creada Consejería de Bienestar Social que “la inmensa mayoría de los habitantes de los poblados chabolistas que hoy existen siguen siendo gitanos, pues en los años anteriores las viviendas concedidas han sido otorgadas la mayoría a payos (véase El País, ed. Mad. 11/6/86). La relegación de los chabolistas gitanos tendrá importantes consecuencias sobre los conflictos étnicos. Así, los realojamientos de familias gitanas que se quedaron al margen de los grandes realojos se enfrentarán posteriormente a una difícil disolución de la marca étnica, con todo el potencial conflictivo que ello conlleva. Por otra parte, tras décadas de abandono, los recambios residenciales masivos llegarán para los gitanos en unos años en los que disminuye de forma drástica la construcción de viviendas sociales, como sucedió a partir de 1988 tras el “Decreto Boyer”. En Madrid, una de cada tres de las viviendas sociales construidas por la Comunidad entre 1986 y 1990 estuvieron destinadas –bajo más que módicos alquileres de 4.000 pesetas– a los habitantes de “poblados-margen”, esto es, a familias gitanas que habían quedado fuera de las anteriores grandes operaciones de realojo (Gaviria et al, 1991: 71). Estas distribuciones etnificadas de recursos tan valiosos expandirán los agravios y las quejas payas por la distribución interétnica de las escasas y competidas viviendas sociales, conformándose un discurso excluyente al que más adelante denominamos como el de “los dones incompletos”.

mezcladas, y los que mejor nivel de adaptación presentan [...] Un 13% de las familias habitan en los centros históricos, en zonas susceptibles de sufrir deterioro [...] Un 8% de las viviendas se hallan en zonas marginadoras, y por su segregación no cumplen los requisitos que faciliten una convivencia entre poblaciones [...] Para reunir aquellas viviendas que, por estar ubicadas en municipios de escaso tamaño, quedaban fuera de estas categorías se creó una categoría denominada “viviendas dispersas en la población”. En esta situación se halla un 8% de las familias gitanas [...] Aunque se está a medio camino en cuanto a promoción de la vivienda con este colectivo, en los últimos años se ha avanzado notablemente en lo que al acceso a la vivienda se refiere. Las poblaciones susceptibles de grave marginación, apenas alcanzan el 8% de esta minoría [...]. Esta información ayuda a destruir el estereotipo de viviendas marginadas en las que viven los gitanos” (Grupo PASS, 1991: 32)<sup>9</sup>.

En suma, aunque tardía y notablemente asimétrica en comparación a la intervención realizada sobre poblaciones chabolistas payas, la acción pública ha transformado las condiciones residenciales de la población gitana. Así, en 2002, la residencia en asentamientos segregados (focos chabolistas, casamatas, sanquis, barrios de tipología especial, etc.) limitaba las oportunidades vitales de entre un 10 y un 12 por ciento de la población gitana. Como afirma quien ofrece estos datos: “si los gitanos se han beneficiado de la universalización de las políticas de bienestar, ha sido el acceso a viviendas y a entornos urbanos más normalizados uno de los factores claves en la mejora de las condiciones de vida y en el significativo avance en la incorporación social que ha experimentado esta comunidad” (Rodríguez, 2002: 21)<sup>10</sup>.

Datos de un reciente estudio (Fundación Secretariado Gitano, 2008) también muestra el cambio en las condiciones residenciales de buena parte de la población gitana. En primer lugar, aunque el 83% de individuos con más de 15 años de antigüedad

---

<sup>9</sup> Los datos básicos de aquel estudio del Grupo P.A.S.S se encuentran también recogidos de forma más sintética en otro trabajo del director del mismo (Marcos Sanz, 1995: 314 y ss).

<sup>10</sup> Se apunta lo mismo sobre Andalucía, la comunidad con casi la mitad de la población gitana del Estado: “en relación a la vivienda gitana estamos ante una población muy dependiente y, por tanto, muy alejada de los mitos tradicionales de los gitanos como marginales, autónomos y separados [...] Las políticas sociales de vivienda han sido muy activas en las últimas décadas y han afectado notablemente al hábitat gitano y a las pautas de vivienda gitana” (Gamella, 1996: 248).

en una residencia residen entre vecindario también gitano, la mayoría de esas viviendas, el 88% de las viviendas (4 de cada 5) se localiza en el entramado urbano de los municipios. De ese porcentaje de viviendas, no obstante, un 38% se localiza en barriadas periféricas. Asimismo, hay que destacar el hecho de que todavía persiste un 6% de asentamientos segregados.

Por otro lado, continúa el estudio del Secretariado Gitano (2008), la mayoría de los hogares de personas gitanas identificados, concretamente el 88,1% frente al 68% en 1991, son viviendas unifamiliares y, sobre todo, pisos y apartamentos en altura. Circunstancias que contribuyen, resalta el equipo responsable de la investigación, a desmentir algunos tópicos y prejuicios comunes con respecto a la vivienda de la población gitana. Las chabolas, las viviendas móviles y viviendas de transición representan, hoy, el 12% de los casos censados, frente al 31% que arrojaba el mapa de viviendas realizado en 1991. La acción pública de recambios residenciales ha sido decisiva en este descenso. No obstante, y sin contar a la población roma rumana en estas situaciones, todavía quedan unos 10.000 hogares de familias gitanas que no reúnen las condiciones adecuadas, lo que no deja de ser una cifra desproporcionada en comparación a la situación residencial de la comunidad española mayoritaria.

### **Puntos negros de las políticas de inclusión étnica y expansión de las condiciones sociales de posibilidad para el conflicto y la movilización antigitana**

La multiplicación de las políticas de inclusión étnica aplicadas, sobre todo entre la segunda mitad de los ochenta y primera mitad de los noventa, reúne diversas sombras que se proyectarán sobre las relaciones interétnicas, ampliando el abanico de condiciones sociales de posibilidad de los conflictos y tensiones interétnicas entre comunidades vecinales payas y poblaciones gitanas objeto de recambios residenciales que, si bien multiplican las interdependencias interétnicas, no siempre implican una disminución de la segregación. Aludiré a dos de esos puntos negros, a mi juicio centrales, para comprender las dinámicas de las relaciones vecinales con la minoría gitana.

Una primera sombra la constituye el recurso, habitual durante los ochenta y descartado progresivamente a medida que transcurren los noventa, a *fórmulas de realojo que preservaban la marca étnica*. Esto es precisamente lo que sucede con las llamadas barriadas de “tipología especial” y con las “barriadas de transición”, tantas

veces y en tantos lugares eternizadas. Por ejemplo en Madrid, el 60% de las familias realojadas entre 1986 y 1991 lo fueron en barriadas de tipología especial, generalmente dentro de operaciones de 80 a 100 viviendas (Gaviria et. al., 1991: 70). Entre 1986 y 1998, años en los que funciona una entidad dedicada al reaolajo de “población marginal” gitana, unas 1.000 familias de unas 2.800 en total realojadas terminan en estas barriadas que reproducen condiciones segregativas y que, al menos hoy, dan pie a más de una autocrítica por parte de los propios directores de las entidades encargadas de aquellos programas (Martín Tejedor, 1999).

Pero en su momento, estas fórmulas de reaolajo recibirán justificaciones diversas, al menos hasta que se impone durante la segunda mitad de los noventa la legitimidad y necesidad de realojamientos que diluyan la marca étnica, procediéndose en la mayoría de las ciudades del Estado al desmantelamiento de estas barriadas y a la, eso sí, resistida y explosiva distribución en dispersión de sus marcados habitantes<sup>11</sup>. Por una parte, y aunque se acumularan desde los primeros ensayos resultados que invitaban a abandonar estos monoculturales “poblados modelos” a los que la prensa de las ciudades poco tardaba en calificar de “estercoleros”, se incidía en la necesidad de transición-adaptación previa de las familias extraídas de las chabolas a la “vivienda normalizada”. Por otra parte, también aparecía la cantinela (a mi juicio perversa) de la sensibilidad multicultural traducida, a la hora de reaolajar al menos, en el deber de ofrecer y aplicar una opción de recambio residencial ajustada a las costumbres, las expectativas y preferencias de las familias a reaolajar, a quienes frecuentemente se les atribuía y/o concedía el deseo de permanecer exclusivamente entre congéneres étnicos, a fin de no erosionar su identidad grupal (Alguacil y Denche, 1991).

El recurso a esta modalidad de reaolajo dista, no obstante, de poder explicarse únicamente atendiendo a las prenociones movilizadas sobre el “multiculturalismo” y los pobres más y menos adaptables a recursos normalizados que ponen en juego ideólogos y expertos de las agencias de intervención social. Otro factor determinativo en la proliferación de estas fórmulas resegregativas de reaolajo<sup>12</sup> es la ordenación capitalista

---

<sup>11</sup> Así, entre 1995 y 1999, el modelo es prácticamente descartado en la Comunidad de Madrid. En el 90% de los casos se opta por comprar viviendas en el mercado libre para reaolajar. En 2002 el Consejo de Europa instaba a los Estados miembros a “impedir, prohibir, y cuando sea necesario, revertir cualquier política nacional, regional o local que tenga como objetivo reaolajar gitanos en zonas no apropiadas de los suburbios, o que trate de reaolajarlos en zona en base a su etnicidad”. Cf. Comité Ministros Consejo de Europa. Resolución 28 ag. 2002

<sup>12</sup>Fórmulas resegregativas que, no obstante, la mayoría de las veces sí que conllevan una multiplicación de las interdependencias competitivas entre los realojados en solares específicos y los vecindarios payos cercanos a esos lugares, hasta el punto de que muchas de estas barriadas gitanas montadas por la

del territorio. No se llegará al extremo de afirmar que “en los últimos 30 años en España no se han construido viviendas sociales por motivos sociales, sino por intereses urbanísticos y por motivos de reordenación urbana” (Gaviria et al, 1991: 60). Pero sí que puede hablarse, cuanto menos, de una relación simbiótica entre operaciones de realojo e intereses urbanísticos. Como reconocía el último “informe sobre chabolismo en Andalucía” que emitió nuestro Defensor del Pueblo al Parlamento:

“La supresión de los diversos asentamientos chabolistas en Andalucía se ha llevado a cabo con criterios y metodologías muy diferentes, incluso dentro de una misma ciudad. No obstante, en la mayoría de los supuestos la ejecución del planeamiento urbanístico, y no la solidaridad, ha sido la que ha impulsado la supresión y desolajo de los asentamientos chabolistas, a veces mediante métodos que hay que rechazar como la oferta de dinero a cambio de que las familias se marchen” (Oficina Defensor Pueblo Andalucía, 2005: 42).

Al evaluarse los fracasos de las barriadas de tipología especial, el informe aludía de manera más explícita a la apuntada simbiosis entre acciones en materia de realojo y gestión capitalista del suelo urbano. Fenómeno que explica, por encima de las exigencias de vecindarios cercanos a los poblados y de entidades civiles-humanitarias para acabar con estos lugares, buena parte de las urgencias que se han dado muchas administraciones en dismantelar “poblados” gitanos durante años abandonados hasta que los terrenos fueron codiciados, como ocurrió con los tristemente famosos poblados de La Celsa en Madrid y de Los Bermejales y las miles de viviendas previstas, en Sevilla:

“No hemos encontrado ni un solo caso, ya sea en nuestra comunidad autónoma o en otras del Estado, en el que, para erradicar un asentamiento chabolista, haya resultado una alternativa crear una ciudad tránsito o provisional en la que teóricamente las familias aprenderían las habilidades sociales [...] Todos estos modelos, surgidos muchas veces con la mejor de las intenciones, y otras, todo hay que decirlo, para aminorar de cara a la sociedad la responsabilidad que supone suprimir un asentamiento para liberar suelo destinado a infraestructuras o

---

administración han condicionado la áreas lógicas de expansión urbana de muchas ciudades, así como el valor de las viviendas y negocios más cercano a las barriadas de realojo.

usos residenciales que generan enormes plusvalías, han concluido en un radical fracaso, que lo único que ha conseguido es trasladar el problema de un lugar a otro e, incluso, aumentarlo en su nueva localización. Idéntico destino han tenido los denominados barrios de tipología especial” (Oficina Defensor Pueblo Andalucía, 2005: 42).

La experiencia muestra hasta qué punto fórmulas como las barriadas de transición y de tipología especial multiplicarán, a veces en pocos años, los estigmas históricamente prevalecientes sobre la comunidad gitana, nutriendo y legitimando al mismo tiempo lógicas y discursos segregativos que encuentran en nuevas fuentes de conflicto étnico, como el tráfico de drogas, sus bases de apoyo. Así, una de las bases justificativas de la exclusión más recurrentemente desplegadas cuando las administraciones proceden a dismantelar estos núcleos, dispersando (por fin) a sus ocupantes entre vecindarios payos que ofrecerán numerosas resistencias civiles a la inclusión, será la acusación de que, extraídos de las chabolas y reubicados ya antes por la administración en nuevas casas y barriadas, esos colectivos siguieron siendo incapaces de adaptarse y habitar sin degradar. Lo que volvería a ocurrir, se afirmará frecuentemente, en cualquier otro lugar que ocupasen esas familias en el futuro. Como ha planteado San Román (1997: 218), el peso de las resegregaciones estatales anteriores, como las que llevaron a muchos poblados intervenidos a convertirse en pocos años en “agujeros de marginalidad” alimentadores de buena parte de los pánicos morales securitarios de las ciudades, se dejará sentir sobre las relaciones étnicas una vez las administraciones desechan este modelo de realojo.

Una segunda sobra de las intervenciones de los dispositivos de inserción que afectan a poblaciones gitanas se localiza en la ***estructuración clasista que revela la localización de las políticas de inclusión étnica***, casi en exclusiva limitadas a escuelas y barriadas de clases populares muchas expuestas a procesos de precarización. Al igual que la etnificación de los realojos –máxime en un contexto de “thatcherización” de la vivienda pública– intensifica los agravios por la distribución interétnica de recursos tan escasos y reñidos, la marca de clase que tienen los lugares habitualmente “seleccionados” para reubicar familias gitanas también influye en los conflictos, en sus posibilidades y dinámicas, en las formas bajo las cuales se justifica la exclusión étnica frente a la sociedad más amplia, así como en las percepciones de la opinión pública y creadores de opinión en torno al racismo.

Ausente salvo excepciones la variable de control –la posibilidad de dilucidar cómo se ve afectada la complacida tolerancia de las clases medias-altas el realojo de colectivos estigmáticos en sus preservados residenciales y centros educativos– se refuerza la falsa y complacida impresión de que existe un espacio social del racismo, resultando el fenómeno más patente y extendido entre las clases populares. Y lo que es más importante. La estructuración clasista de las políticas de inclusión étnica convierte el agraviado discurso sobre “barrios pobres” –concebidos como depósitos de grupos que añadirían nuevos elementos de miserabilización a lugares largamente descuidados por las administraciones– y “barrios ricos” –exonerados de cuotas de solidaridad interétnica que se exige invariablemente a los peor situados en la lucha por la distribución–, en uno de los repertorios discursivos más habitualmente desplegados a la hora de materializar y legitimar la exclusión étnica.

Puede decirse que la administración clasista de la mayor parte de los realojos de población gitana emprendidos ha contribuido, junto con otros muchos factores, a la configuración de una doble red de exclusión. Una impersonal, silenciosa, sustentada en las rutinas de la ley: la exclusión que se ejerce sin necesidad de movilizarse ni dar voces a través de las propiedades de rentas elevadas, cuyos valores sociales y mercantiles son preservados por el Estado. Y otra red de exclusión, en cambio, mucho más ruidosa, molesta y disruptiva: la que se ejerce cortando el tráfico y ocupando los abandonados solares del barrio cuando, en vez del parque o las infraestructuras un día prometidas, se anuncia el uso del lugar como recambio residencial para colectivos que, dado la carga estigmática que arrastran, contribuyen a los procesos de desvalorización social de las zonas donde se enclavan los realojos y, de esta manera, refuerzan las dinámicas de segregación social de las ciudades<sup>13</sup>.

### **Los efectos conflictivos de las políticas de realojo: nuevos vectores de agravio interétnico, nuevas lógicas de exclusión, y nuevos marcos de significados etnicistas**

---

<sup>13</sup> Lo apuntaba Parkin y puede ser trasladado al campo de la exclusión etnicista en España: “cuando el Estado retira su apoyo tácito o expreso a una serie de prácticas excluyentes, los grupos de la clase inferior tropiezan con dificultades crecientes para sostenerlas a través de sus propios esfuerzos de organización. En este caso, se ven obligados (*sic*) a recurrir a tácticas molestas y ruidosas basadas en la solidaridad y en la acción colectiva, en lugar de hacerlo mediante los medios distantes de la ley y el Estado” (Parkin, 1984: 141).



Debemos explicar porqué, a fin de desvelar los efectos sobre las relaciones étnicas de las fórmulas de realojo explicadas, vamos a focalizar el análisis (a limitarnos, en suma) sólo a los discursos y lógicas de exclusión prevalecientes en casos de conflicto vecinal colectivo ante el anuncio –a veces meros rumores capaces de desatar pánicos morales etnicistas– o la materialización de políticas de realojo

La acción colectiva étnica es sólo una faceta de las relaciones étnicas. Sin embargo, los conflictos colectivos condensan en sus causas, cursos de acción y formas de litigación muchos de los elementos que, en el momento en que acontecen, estructuran el racismo cotidiano hacia un grupo en una sociedad<sup>14</sup>. Los conflictos, en suma, conforman rituales de interacción que, en el caso de las relaciones étnicas, permiten analizar las lógicas y focos de exclusión que estructuran la discriminación cotidiana y el agravio frente a minorías racializadas, como la comunidad gitana. Por eso nos centramos en los discursos que se despliegan en protestas colectivas antigitanas para analizar las consecuencias sobre las relaciones étnicas de las distintas fórmulas de realojamiento de grupos de población gitana.

Por otro lado, en la España posfranquista, el espacio residencial y la escuela constituyen dos ámbitos recurrentes de movilización antigitana. Según sociometrías de diversos tipos de conflicto antigitano, el 46% de las movilizaciones documentadas (sólo en el diario “El País”) entre 1976 y el 2000 tienen como motivo de fondo, y como circunstancia precipitante, agravios al hilo de la distribución de familias gitanas en el espacio residencial o la escuela, destacando la frecuencia de las resistencias colectivas a la vecindad o coresidencia interétnica –o a las condiciones en las que ésta se planea o materializa– con casi un 34% del conjunto de las acciones colectivas antigitanas documentadas (Gamella, 2002: 15)<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Racismo cotidiano (prejuicios, actitudes, leyendas urbanas y chascarrillos, prácticas interpersonales de discriminación, etc.) que, en sociedades como la española durante las últimas décadas, constituyen la mayoría de las veces un fenómeno sistemático de exclusión, pero encubierto y difícilmente observable, salvo para quienes sufren en sus carnes la discriminación cotidiana y el prejuicio constante.

<sup>15</sup> Según el citado recuento, las acciones contra la presencia gitana en barrios y escuelas sólo se ven superadas en frecuencia por las acontecidas al hilo de sucesos críticos violentos que implican como victimario a algún vecino gitano. Aunque esos histogramas contruidos vía prensa están sesgados – ignoran, por ejemplo, la tendencia de los editores a preferir noticiar eventos dramáticos e impactantes más atractivos para el periodismo–, sí es cierto que los antecedentes inmediatos de violencia interpersonal resultan un preludio bastante certero de acción colectiva antigitana. Sobre todo en pueblos, los sucesos críticos, a veces difundidos bajo rumores que condensan imaginarios etnicistas, estructuran situaciones de enorme tensión evaluadas a partir de los peores rasgos habitualmente atribuidos a los gitanos sin distinción –recurso bajo pautas familistas a las formas más letales de violencia, ante nimiedades, y como forma de presentación en sociedad, ....



En el hervidero incombustible de protestas antigitanas al hilo de fórmulas diversas de realojo resistidas por la población civil mayoritaria se despliegan marcos de significados, patrones de justicia popular, titularidades de derechos y lógicas de exclusión específicas del “neoracismo diferencialista”. Ideología de exclusión que se sustenta, al tiempo que en la sustancialización de las diferencias culturales, en la naturalización de la segregación, a fin de evitar “choques culturales” que se anticipan como inevitables<sup>16</sup>. De esta manera, poco media entre, por un lado, la sustancialización de las diferencias entre payos y gitanos, desocializadas, concebidas como distancias e incompatibilidades culturales inasimilables y, por otro lado, la demanda de regresión el *status quo* tradicional de relaciones étnicas sustentado en la segregación. Modelo antiguo preferido de organización social de las relaciones étnicas que se desmorona ante un acción estatal –de “los políticos” se hablará– que incluye cada vez más a mayor número de familias gitanas en una serie indefectible de espacios sociales –barrios y colegios de clases populares–. Discriminados espacios considerados, según se denunciará a fin de legitimar la exclusión, como depósitos invariables de grupos estigmáticos que añadirían nuevos elementos de miserabilización a esos lugares. Sitios, además, en los que se verían trastocados los equilibrios sociales intergrupales. A ello contribuiría el *laissez faire* y falta de control que caracterizaría la acción del Estado en materia de relaciones con comunidades gitanas, una vez éste impone la coresidencia interétnica en barriadas populares con realojos, gravando así con cuotas de solidaridad interétnica a la parte más vulnerable del cuerpo social. Sectores presentados en sociedad durante los conflictos como “pobres respetables” amenazados por “subculturas marginales”, desviadas, por grupos que no corresponderían –por aquello de su “cultura” inasimilable ni tan siquiera estarían en condiciones de hacerlo– a las preferentes ayudas públicas recibidas (desde viviendas sociales hasta becas de comedor) con ejercicios de resocialización en las normas de consumo, trabajo, crianza y vecindad culturalmente dominantes y consideradas legítimas.

Dominan por tanto en este repertorio de protestas los desafíos y reivindicaciones de naturaleza reactiva, esto es, aquellas acciones que reivindican la preservación de un *status quo* tradicional de relaciones intergrupales y se expanden en contextos sociohistóricos en los que, como ha ocurrido en la España reciente, un grupo asiste a la desintegración del modelo de cierre social sobre recursos y oportunidades sociales cuyo

---

<sup>16</sup> Véase Solana Ruiz (2000) para una introducción a las lógicas subyacentes a este “nuevo racismo culturalista”.

control preservaba, generalmente bajo una protección política que limitaba las interdependencias competitivas con otros grupos (Tilly, 1978)<sup>17</sup>. En este nuevo contexto fraguan y se expanden reivindicaciones e idearios sobre las relaciones étnicas que convergen en una propuesta segregativa: la mejor forma de organización social de las relaciones con gitanas y gitanos, homogeneizados sin gran distingo, es aquella donde ambas comunidades conforman rectas paralelas cuyas intersecciones hay que evitar, a fin de evitar perjuicios y preservar los equilibrios crecientemente trastocados entre ambos grupos. Como apuntaba López Varas:

“Estas lógicas segregacionistas se manifiestan en todos los nuevos ámbitos de intensificación de las relaciones y de la competencia interétnica. En el espacio económico se manifiesta como erradicación de la venta ambulante. En el espacio residencial se manifiesta como rechazo a los realojamientos y la opción por barrios segregados. En el espacio educativo se manifiesta en el rechazo, por inviable, a la integración escolar de los niños gitanos [...] Junto a estas demandas de segregación se observa una demanda de endurecimiento de la actuación de las autoridades en el restablecimiento del orden social y de los equilibrios en las relaciones entre payos y gitanos que se acusa de violar a los gitanos” (López Varas, 1993: 18-19).

La demanda de segregación se extiende tanto al espacio residencial como escolar<sup>18</sup>. Pueden, no obstante, darse algunas variaciones entre los repertorios

---

<sup>17</sup> Cabría hablar también de acciones de exclusión competitiva. “Contra el gitano, lucha por tus derechos”, añadiré que perdidos a golpe de políticas de realojo que, a su vez, conlleva la multiplicación gitana en aulas tradicionalmente payas... Ese lema –expandido en pintadas en una barriada obrera zaragozana donde se pretendía reubicar a gitanos– condensa la lógica reactiva que preside la protesta antigitana en la España posfranquista. Estas lógicas reactivas desplegadas en los conflictos son posibilitadas por las nuevas relaciones de interdependencia y competencia interétnica entre payos y gitanos, algo que también se manifiesta en el terreno de los discursos contra los gitanos en escenarios de conflictos. Sin embargo, las nuevas relaciones de competencia no explicarían por sí mismas estos conflictos. En muchos casos, hay competencias por recursos –con los gitanos o con otros actores– sin que se produzcan movilizaciones. Las que se producen vienen dadas en buena medida por un sentimiento de indignación, el cual es producto de previas economías morales que jerarquizaban el valor social de los sujetos. Así, el orden anterior de distribución interétnica de los recursos se naturaliza como un sistema justo, cuya violación indigna, sobre todo cuando detrás de la misma aparece el Estado.

<sup>18</sup> Ámbito éste donde también cada vez resultará más difícil e ilegítimo preservar la composición monocultural del alumnado, debido precisamente a la multiplicación de realojos de familias gitanas, y a la consiguiente asignación de sus nuevas generaciones a los colegios (casi siempre públicos) de las zonas más cercanas a los nuevos asentamientos. Véase, Río (2002) para una breve historia de la recientes

discursivos desplegados en las protestas al hilo de realojo, frente a lo que se despliegan en las protestas escolares (Río Ruiz, 2005: IV). Al menos en el caso de las protestas contra los realojos, las bases justificativas de la exclusión mantienen cierta constancia a lo largo del repertorio, sobre todo en lo que concierne a la extendida identificación de los realojos con la agregación de nuevos elementos de miserabilización a los barrios, como ocurre con la asociación entre realojos y proliferación de drogas y drogadictos, un discurso constante desde la segunda mitad de los ochenta. En cambio, en otro tipo de conflictos, como las discriminaciones escolares, los marcos de significados desplegados experimentan modulaciones notables a medida que avanza el repertorio<sup>19</sup>.

Pero, vayamos por partes. En las resistencias populares a las políticas de realojo se imbrican sobre todo **cuatro discursos** que convergen en una lógica, segregativa.

En primer lugar, aparece lo que podría calificarse como “*el miedo a caer*”, esto es, el extendido temor a la devaluación del entorno y, por extensión de las propiedades, en el caso de que “los políticos” impongan la coresidencia con gitanas y gitanos procedentes, la mayoría de las veces, de núcleos objetos de solidificados estigmas que anteriores políticas resegregativas contribuyeron a consolidar y multiplicar, como ha sucedido con las barriadas de tipología especial cuyo posterior desmantelamiento provocará multitudinarias resistencias.

En un país en el que la mayor parte de la población de extracción y condición obrera es propietaria de una vivienda, algo que ha influido en positivo en la mejor conservación de los inmuebles de las clases populares españolas en comparación a los sucedido en países donde domina el parque de viviendas públicas de alquiler, el discurso de la incontrolable devaluación material y simbólica del entorno, así como del conjunto de los habitantes y propiedades, no es una mera añagaza, aunque mantenga mucho de acción estratégica a la hora de justificar la exclusión. La presencia o anuncio de familias gitanas realojadas, dado el potencial estigmático que suelen acumular las zonas de las que éstas proceden, suele contribuir –junto con otros factores cuyo análisis desbordaría los objetivos de este trabajo– a la desvalorización de la imagen social de los barrios que los absorben. Así, los programas de realojo limitados a ciertos espacios

---

escolarización de la comunidad gitana y de los efectos conflictivos de este proceso en las escuelas (públicas) posfranquistas.

<sup>19</sup> En concreto, las bases justificativas de la exclusión se diversificarán notablemente y tomarán mucho más elaboradas a partir de la segunda mitad de los ochenta, una vez se impone la norma de niños gitanos en aulas (públicas) payas. Puede hablarse aquí de discursos que evolucionan desde justificaciones encaminadas a preservar el blindaje étnico de los colegios a justificaciones, reclamaciones y discursos estratégicamente encaminados a recomponer la segregación una vez los colegios públicos, ven trastocada su composición monocultural anterior de manera irremisible (Río, 2002; 2005:IV).

sociales, aunque para los grupos objetos de los mismos implique un más que justo incremento en sus posibilidades de inclusión social, actúan como un factor más en los procesos de segregación social de las ciudades. Fenómeno éste en el que las percepciones sociales sobre la composición social de los vecindarios resultan fundamentales, tanto o más que la distancia del centro u otros factores de los barajados como condicionantes de las diferencias de precio entre viviendas. Al respecto el sociólogo urbano Jesús Leal (2002) muestra cómo entre zonas cercanas, con pisos y equipamientos similares, buena parte en las diferencias en el precio de las viviendas de una zona con respecto a otra en muchos aspectos similar la marca la presencia o no, en alguna de ellas, de minorías étnicas estigmatizadas.

En segundo lugar, aparece el discurso de la *dobles discriminación negativa* que experimentan los escenarios de realojo. Este discurso se despliega para rebatir las motivaciones racistas que muchas veces adjudican los medios de comunicación a los vecindarios movilizadas, así como efectivo banderín de reclutamiento para la acción colectiva. Y es que, por un lado, las políticas de realojo se identifican con la apuntada *discriminación clasista* entre barrios depósitos invariables de colectivos estigmáticos y barrios exonerados de esas “molestas” cuotas de solidaridad interétnica. Por otro lado, los realojos se convertirán en elementos confirmatorios de extendidas percepciones de *abandono oficial*. Este discurso se manifiesta constantemente allí donde la operación de recambio residencial proyectada se suma a otras anteriores ya materializadas en el barrio. También aparece en barriadas con escasos y precarios equipamientos sociales, esto es, en lugares con solares o comunidades vecinales en los que había promesas políticas o expectativas vecinales (al final rotas) de que se construyeran zonas verdes, centros de enseñanza, u otros servicios que mejoraran la calidad de vida vecinal y revalorizaran el entorno, en vez de someterlos a los efectos negativos asociados por parte de los vecindarios a la presencia gitana. Así, desde su práctica desarticulación a finales de la transición, las puntuales resurrecciones de los marchitos movimientos vecinales contra la discriminación urbana están frecuentemente ligadas a anuncios de políticas de realojo de población gitana en esos barrios. Algo que también ha ocurrido en los conflictos escolares, donde las denuncias por parte de los padres payos de precariedad de recursos humanos e infraestructuras en los centros se manifiestan justo cuando aparecen escolares de etnia gitana, o se anuncia su matriculación.

En tercer lugar, aparecen cada vez con más frecuencia a medida que avanza el repertorio agraviados discursos ante lo que se juzga como una *distribución injusta de*

**recursos públicos escasos.** Así, a medida que menguan las viviendas verdaderamente públicas y cunde la imagen de que se ha etnificado la distribución de éstas, fraguan acusaciones que inciden en el parasitismo de los gitanos (hasta de las gitanas). Acusaciones que resultan mucho menos aplicadas a los inmigrantes, llamativamente. La concesión pública de viviendas a familias gitanas es juzgada, por tanto, como una forma de trato preferencial hacia éstas por parte de la administración, discriminación que revierte además en un empeoramiento de las posibilidades de integración y promoción social de la mayoría paya.

En cuarto lugar, estrechamente imbricado con el anterior, aparece el agravio ante lo que se juzga como desafección de las familias gitanas hacia los parámetros de convivencia culturalmente dominantes. Es aquí donde se manifestará el discurso de la **“pobreza desviada”**. Se sustenta el mismo en la distinción estratégica entre “pobres normalizados” –los que valorarían las oportunidades recibidas y tratan de adecuarse a la norma de vecindad, consumo y trabajo legitimada– y “pobres desviados” –quienes no corresponderían a sus oportunidades de integración y mejora ofrecidas con un uso adecuado de los recursos públicos recibidos para este fin –. Aquí hallamos toda la batería de tópicos sobre la incapacidad de la “cultura gitana” para usar adecuadamente la vivienda y adaptarse al régimen de convivencia en las comunidades. De esta manera, una variante del discurso de la “pobreza desviada” resultaría el discurso de *los “dones incompletos”*, esto es, “no correspondidos” con esfuerzos de resocialización por parte de colectivos a los que, según extendidas opiniones, se considera como invariables beneficiados desde la administración sin ofrecer nada a cambio, sometimiento a las normas, por ejemplo.

Como venimos apuntando, estos repertorios discursivos, si bien utilizados estratégicamente a la hora de justificar la acción de exclusión étnica ante la sociedad más amplia, representan valoraciones y respuestas socialmente compartidas ante las nuevas relaciones de interdependencia y competencia entre payos y gitanos en el espacio residencial<sup>20</sup>. Lo apuntaban López Varas y Fresnillo en un estudio sobre

---

<sup>20</sup> Diferentes trabajos empíricos refuerzan estos hallazgos, desgranados con mucho más detalle del que aquí podemos permitirnos en otros trabajos (Río, 2005). En el caso de la convulsa historia del asentamiento de Los Bermejales, en Sevilla, esta dinámica se ve ilustrada por el trabajo de campo de una doctoranda: *“cuándo Las Caracolas se crean era todo campo hasta esta calle, con lo cual el asentamiento no era visible. Yo creo que podía haber gente que entraba por ese camino y llegar al final y no saber siquiera que había allí un asentamiento (...) El problema empieza cuando empiezan a llegar aquí vecinos [payos, que la mayoría van ocupando viviendas sociales desproporcionadamente repartidas en Los Bermejales, y cada vez más cerca del asentamiento que construyó la administración]. Y ven que tienen que convivir en el barrio con estas personas, los supermercados, las farmacias (...) Había más*

“representaciones ideológicas de los gitanos” en escenarios de “conflictos urbanos” que merece ser citado extensamente:

“Los discursos de la segregación se intensifican a través de la figura del acoso y del cerco. Con las políticas de realojo, la representación de la amenaza de la marginalidad se percibe mucho más próxima y dotada de mayor intensidad, hasta el punto de sentirse que existe un riesgo real de que el propio espacio social se vea invadido por el crecimiento de los grupos marginados, y por la extensión de prácticas como el consumo y la venta de drogas. En general, esta percepción de la proximidad del peligro está en relación con situaciones en las que la propia residencia se encuentra muy próxima a zonas de asentamientos de chabolistas, o de realojos que son fuertemente cuestionados en el actual contexto de dificultades generalizadas de acceso a la vivienda, así como en relación a situaciones en las que la propia actividad económica de la zona se ve afectada por las actividades de los gitanos [...] En este discurso se perfila claramente un sentimiento de persecución desde abajo. Se focaliza la percepción de la amenaza de contaminación del propio espacio en los grupos marginales, que han dejado de permanecer apartados en la periferia de la ciudad y del sistema social para comenzar a introducirse en las capas centrales del cuerpo social [...] Esta percepción de avance del ámbito marginal sobre el grupo mayoritario comporta una inversión de las posiciones de dominación/ subordinación en las relaciones sociales entre mayoría paya y minoría gitana, según la cual, a pesar de las apariencias formales, serían los gitanos los que ejercerían el dominio sobre los payos en el plano de la convivencia vecinal en los barrios” (López Varas y Fresnillo, 1995: 86- 88).

## **Conclusiones**

1ª) La división étnica del espacio urbano, naturalizada por tradiciones segregativas anteriores, representa el modelo de organización de las relaciones con esta comunidad prevaleciente en España al menos hasta el posfranquismo. Ese modelo de cierre social sobre el espacio residencial minimizó relaciones, vecindades y

---

*niños escolarizados que cada vez asisten con más regularidad al colegio. Claro, todo eso hace, genera que todo sea más visible..., y entonces: ¡ay qué ver con la gente de Los Bermejales!.* [Entrev. Técnica. S.S.C., cit. Moreno, 2009: 15].

oportunidades de conocimiento intercultural. A su vez, ese modelo de división étnica del espacio residencial minimizó situaciones de interdependencia, competencia y, sobre todo, de conflicto abierto entre comunidades payas y gitanas. La continuidad a lo largo de siglos de ese orden de relaciones interétnicas cerradas, sustentado en la segregación, ha de explicarse atendiendo al papel que hasta hace poco ha jugado el Estado en la exclusión social multidimensional de (amplios sectores de) la población gitana.

2ª) Para la población gitana, comunidad que partía de una situación de marcada y extendida exclusión residencial, el posfranquismo supone una nueva etapa de relaciones con el Estado, sobre todo la transformación del sistema de distribución interétnica de los recursos y de las oportunidades sociales entre payos y gitanos. A lo largo del posfranquismo cambian los parámetros y las fórmulas de intervención pública tradicionalmente aplicadas sobre las condiciones residenciales de segmentos amplios de la minoría. Así, en estos años asistiremos a una expansión sin precedentes históricos de los programas públicos de recambios residenciales para una gran mayoría de familias gitanas en situación de exclusión residencial. Estas familias, expuestas a resegregaciones en el franquismo, habían quedado al margen de lo que se ha llamado el “paternalismo urbano” franquista.

3ª) Los factores y finalidades que, en el posfranquismo, promueven la expansión sin precedentes de las políticas públicas de realojo de comunidades gitanas chabolistas son diversos, aunque aparecen la mayoría de las veces imbricados. En la extensión de los realojos influyen tanto prioridades de ordenación capitalista del territorio ocupado por chabolistas de etnia gitana, como finalidades de inclusión social.

4ª) Las finalidades de inclusión social que promueven la expansión de las políticas de realojamiento, sin llegar a explicarlas en todas sus dimensiones, pueden calibrarse a partir de un hecho que ilustraremos: la progresividad en las fórmulas de realojo adoptadas por las administraciones (casi siempre las locales) a lo largo del período estudiado. Así, durante buena parte de los ochenta prevalecerá un modelo de realojo de chabolistas que, si bien supone una intensificación de la interdependencia interétnica y una descomposición del cierre étnico sobre el espacio urbano, tiende a mantener la concentración de las familias gitanas, reubicadas de manera regular en solares de barrios de clases populares. En cambio, a partir de los noventa esas fórmulas de realojo que mantienen la marca étnica serán cada vez más cuestionadas, así como progresivamente descartadas. En estos años se adoptará, como norma general a la hora de realojar no exenta de sombrías excepciones, una fórmula más avanzada de realojo: la



dispersión de cupos limitados de familias gitanas entre viviendas payas en altura. Ello no evitará, sin embargo, la emergencia de movilizaciones y resistencias vecinales contra esta fórmula *avanzada* de realojos en la cual, frente al anterior modelo, se otorga prioridad a la disolución de la marca étnica.

**5ª)** La acción pública en materia de realojos de población gitana ha transformado de manera sustancial las condiciones residenciales de amplias franjas de la población gitana que nació en poblados chabolistas segregados. Ya a comienzos de los noventa diversos estudios revelaban que la unidimensional y estereotipada imagen de la comunidad gitana como colectivo chabolista, no casaba con la diversidad de alojamientos de los miembros de esta etnia. El chabolismo, núcleo duro de la segregación residencial (Martínez Veiga, 1999), sí era una situación extendida entre (ofreceremos datos) amplias franjas de la población gitana del tardofranquismo. Las últimas investigaciones de la última década también desmienten algunos de los tópicos sobre los hábitats gitanos, mostrando la heterogeneidad creciente en condiciones residenciales de la comunidad gitana.

**6ª)** La transformación de las condiciones residenciales de amplias franjas de población gitana durante el posfranquismo, si bien no siempre ha implicado desegregación residencial de una población que mayoritariamente vive aún rodeada de congéneres étnicos, sí ha supuesto una intensificación, sin precedentes históricos, de la coresidencia interétnica entre comunidades payas y familias gitanas.

**7ª)** Un efecto no deseado, si bien no exactamente imprevisto, de las políticas de realojo ha sido la configuración de nuevas relaciones de interdependencia y competencia interétnica, así como la extensión de nuevos frentes de tensiones y agravios entre payos, agencias del Estado y gitanos. Si bien algunos de los agravios interétnicos que se problematizan durante el posfranquismo ya se manifestaban incipientemente en los estertores del anterior régimen, en las últimas décadas estas escisiones y tensiones se manifestarán con mucha mayor intensidad y frecuencia, diversificándose los motivos, actores y circunstancias precipitantes de los conflictos. Las políticas que alteran la distribución interétnica del espacio residencial constituyen la principal circunstancia desencadenante de acciones colectivas antigitanas.

**8ª)** Por tanto, en este nuevo escenario estatal de relaciones étnicas proliferarán protestas y estrategias de exclusión sustentadas en lógicas segregativas. Se persigue en estos casos la preservación del control étnico sobre espacio residencial al anunciarse o recién materializarse políticas públicas de realojo. A veces, sin embargo, bastará con la



extensión del rumor de que llegarán gitanos, para que se desaten fenómenos de pánico moral y rechazo siguiendo divisorias étnicas. Barreras que adquieren nuevas fisonomías y se ven problematizadas a medida que se multiplican los realojos, tal y como muestran los discursos de los vecindarios de clases populares a los que, invariablemente, acostumbra a exigírseles unas cuotas de solidaridad interétnica muy desigualmente repartidas a lo largo de la estructura social y la geografía urbana.

## **Bibliografía**

ALGUACIL, J. y DENCHE, C. (1991), “La experiencia de los barrios de remodelación y las políticas de realojamiento”. *Documentación social*, núm. 85, pp. 139-151.

BJÖRKLUND, U. (1986), “World-system, the welfare State and the Ethnicity”, *Ethnos*, núm. 51, pp. 285-306.

ELÍAS, N. (1965/2003), “Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros”, *Revista española de investigaciones sociológicas*, núm. 104, pp. 219-251.

ELÍAS, N. y SCOTSON, J. (1965/1997), *Logiques de l'exclusion*, Paris, Fayard.

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO (2008), *Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España*. Cuadernos técnicos, núm. 84. Madrid : Fundación Secretariado Gitano.

GAMELLA, J. F. (1996), *La población gitana en Andalucía*, Sevilla, Consejería de Asuntos Sociales, Junta de Andalucía.

\_\_\_ (2002). “Exclusión social y conflicto étnico en Andalucía. *Gaceta de Antropología*, núm. 18 [en internet: [http://www.ugr.es/~pwlac/G18\\_M07JuanF\\_Gamella.htm](http://www.ugr.es/~pwlac/G18_M07JuanF_Gamella.htm)].

GAVIRIA, M., LAPARRA, M., FERRER, S. y AGUILAR, M. (1991), *Vivienda social y trabajo social*, Madrid, Editorial Popular.

GRUPO P.A.S.S. (1991), *Mapa sobre la vivienda gitana en España*, Madrid, Asociación Secretariado General Gitano.

INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA APLICADA (1980), *Los gitanos españoles*, Madrid, Asociación Secretariado General Gitano.

LEAL, J. L. (2002), “Segregación social y mercados de vivienda en las grandes ciudades”, *Revista española de sociología*, núm. 2, pp. 59-76.

LÓPEZ VARAS, M. L. (1993), *Discursos sociales acerca de los gitanos. El conflicto entre las estructuras formales e informales del sistema social como principio dominante en las relaciones entre payos y gitanos en contextos urbanos*, Granada, Junta de Andalucía-Centro Sociocultural Gitano Andaluz (multicopiado).

LÓPEZ VARAS. M. L. y FRESNILLO PATO, J. L. (1995), *Margen y periferia. Representaciones ideológicas de los conflictos urbanos entre payos y gitanos*, Madrid, Secretariado General Gitano.

MARCOS SANZ, R. (1995), “Mapa de la vivienda gitana en España”, en *Actas del I congreso nacional: los gitanos en la historia y la cultura*. Sevilla, Junta de Andalucía-Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.

MARTÍN TEJEDOR, F. (1999), “Vivienda e integración social: una experiencia de trabajo con familias chabolistas en la Comunidad de Madrid (II)”, *Trabajo Social hoy*, núm. 26, pp. 24-39.

MARTÍNEZ VEIGA, U. (1999), *Pobreza, segregación y exclusión espacial*, Barcelona, Icaria.

MONTES MIEZA, J. (1986), “Sobre el realojamiento de los gitanos”, en San Román T.. (ed./dir.). *Entre la marginación y el racismo: reflexiones sobre la vida de los gitanos*, Madrid, Alianza.

MORENO TORRES, M. (2009), *Las caracolas: El asentamiento chabolista de los Bermejales*. Sevilla: Trabajo para curso de doctorado Etnicidad y Conflicto étnico (U. Sevilla, inédito).

OFICINA DEFENSOR PUEBLO ANDALUCÍA (2005), *Chabolismo en Andalucía. Informe especial al Parlamento*, Sevilla, Junta de Andalucía (<http://www.defensor-and.es/informes/ftp/chabolismo>).

OLZAK, S. (1989), “Labor unrest, immigration, and ethnic conflict in urban America”, *American Journal of Sociology*, vol. 94. núm. 6, pp.1303-1333.

\_\_\_ (1992), *The dynamics of ethnic competition and conflict*. Stanford, Stanford University Press.

OLZAK, S., SHANAHAN, S. y WEST, E. (1994), “School desegregation, interracial Exposure and antibusing activity in contemporary urban American”, *American Journal of Sociology*, vol. 100, núm. 1, pp. 196-214.

OLZAK, S. y SHANAHAN, S. (2003), “Racial policy and racial conflict in the urban United States, 1869-1924”, *Social Forces*, núm. 82, pp. 481-517.

PARKIN, F. (1984), *Marxismo y teoría de clases. Una crítica burguesa*, Barcelona, Espasa.

RÍO, M. A. (1999), “Conflicto étnico y minoría gitana en la Andalucía posfranquista”, *Demófilo*, núm. 30, pp. 107-132.

\_\_\_ (2002). “Conflicto étnico y minoría gitana en las escuelas posfranquistas”, *Aula de encuentro*, núm. 6: pp. 237-244.

\_\_\_ (2003), *Violencia étnica y destierro. Dinámicas de cuatro disturbios antigitanos en Andalucía*, Granada: Maristán.

\_\_\_ (2005), *Desegregación y conflicto étnico. Un análisis del repertorio de protestas contra las políticas públicas de realojo y escolarización de comunidades gitanas en el posfranquismo*, Tesis doctoral, Universidad de Sevilla.

\_\_\_ (2006), “Así vemos y tratamos a la comunidad gitana: estereotipos, prejuicios y discriminaciones hacia la minoría étnica más rechazada”, ponencia en *I Jornadas de intervención social con la población gitana*, Mérida, Junta de Extremadura-Consejería de Bienestar Social (multicopiado)

RODRÍGUEZ, I. (2002), “La relevancia de la vivienda en los procesos de inclusión social con la comunidad gitana”, *Gitanos. Pensamiento y cultura*, núm. 16, pp. 20-39.

RODRÍGUEZ VILLASANTE, T., ALGUACIL, J., DENCHE, C. HERNÁNDEZ, A., LEÓN, C. y VELÁZQUEZ, I. (1989), *Retrato de chabolista con piso. Análisis de redes sociales en la remodelación de barrios de Madrid*, Madrid, IVIMA-ALFOZ.

SABATER, M. (1986), “En busca de soluciones. La experiencia de La Perona”, en San Román, T. (ed./dir.). *Entre la marginación y el racismo. Reflexiones sobre la vida de los gitanos*, Madrid, Alianza.

SAN ROMÁN, T. (1997), *La diferencia inquietante. Viejas y nuevas estrategias culturales de los gitanos*, Madrid, Siglo XXI.

SOLANA RUIZ, J. L. (2000), “Identidad cultural, racismo y antiracismo”, en Gómez, P. *Las ilusiones de la identidad*, Madrid, Cátedra.

\_\_\_ (2001), “Materiales para una teoría general del racismo”, en V.V.A.A. *Nuevas perspectivas y líneas de investigación en torno al trabajo social*, Jaén, Universidad de Jaén.

TILLY, C. (1978), *From mobilization to revolution*, Reading, Adison Wesley Press.

WIEVIORKA, M. (1992), *El espacio del racismo*, Barcelona, Paidós.

WILLIAMS, R. M. (1994). “The sociology of ethnic conflicts: comparative perspectives”, *Annual Review of Sociology*, núm. 20, pp. 49-79.

